



UNAP

RECTORADO

Resolución Rectoral N° 0154-2023-UNAP Iquitos, 20 de febrero de 2023

VISTO:

El Informe N° 090-2023-OAJ-UNAP, presentado el 17 de febrero del 2023 por don Carlos Andrés Da Silva Torres, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, sobre anulación de retiro definitivo y activación de matrícula, solicitado por doña **Rocío del Pilar Vargas Zagaceta**, con Código Universitario N° 2151919, Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, en la Escuela Profesional de Idiomas Extranjeros, en la especialidad de Inglés - Alemán, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 11 de enero del 2023, la administrada solicitó al Rector de la UNAP, la anulación de su retiro definitivo de la universidad y activación de su matrícula;

Que, mediante Memorando N° 0065-2023-R-UNAP del 13 de enero del 2023, el Rector de la UNAP solicita a esta oficina emitir opinión legal respecto al pedido planteado por la administrada;

Respecto a la autonomía universitaria:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, otorga a las universidades autonomía, en el marco de la propia Constitución y de las leyes;

Que, esta garantía está contemplada en el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que señala que el Estado reconoce la autonomía universitaria, manifestada a través de cinco regímenes: a) normativo, b) de gobierno, c) académico, d) administrativo; y, e) económico;

Que, respecto a la autonomía normativa, el numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley N° 30220 "implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria". (Subrayado es nuestro);

Que, el Tribunal Constitucional ha desarrollado en diversos pronunciamientos los alcances y el contenido de la autonomía universitaria, partiendo siempre del concepto recogido en el referido artículo 18 de la Constitución. Así, el máximo intérprete constitucional ha señalado que: "La autonomía es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste"; y, "(...) el contenido constitucionalmente protegido de la garantía institucional de la autonomía universitaria se encuentra constituido, *prima facie*, por el conjunto de potestades que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se ha otorgado a la universidad, con el fin de evitar cualquier tipo de intervención de entes extraños en su seno";

Que, en el marco de este derecho y garantía que la Constitución concede a las universidades, independientemente de su naturaleza pública o privada, es que éstas pueden ejercer sus capacidades y potestades a fin de prestar, adecuada y óptimamente, el servicio educativo superior universitario;

Que, de acuerdo a la definición de autonomía universitaria establecida y a lo dispuesto en la Ley Universitaria, el régimen de autonomía normativa implica la potestad autodeterminativa para crear y expedir normas de obligatoria aplicación en su ámbito universitario, que les permita, a su vez, desarrollar su potestad de auto organización. Asimismo, el régimen de autonomía académica, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria, y supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, entre otros;

Que, ahora bien, una de las manifestaciones del ejercicio de la autonomía universitaria, es la posibilidad que tienen las universidades para, a través de sus autoridades competentes, aprobar sus estatutos y/o demás normas reglamentarias, donde se establecerá y se desarrollará definiciones, procedimientos y determinadas prácticas — entre otros —, así como sus alcances;



Resolución Rectoral N° 0154-2023-UNAP

Que, cabe precisar que el ejercicio de la autonomía universitaria no es irrestricto, pues tal potestad debe respetar los límites establecidos por la Constitución y demás normativa aplicable;

Que, considerando lo expuesto, podemos desprender que el concepto de autonomía no implica que el régimen de autogobierno de las universidades se convierta en una autarquía, sino que, por el contrario, que las normas que aprueben, como su estatuto, reglamentos o las decisiones acordadas en sus instancias de gobierno, guarden correspondencia con los fines que la Constitución y la Ley Universitaria atribuyan a las universidades;

La educación como derecho fundamental y como servicio público:

Que, el derecho a la educación es un derecho humano y fundamental, que consiste en el acceso al proceso de aprendizaje y enseñanza, de manera libre, gratuita y de calidad, y en la responsabilidad de los Estados por garantizar la educación y proveerla. El ejercicio de este derecho permite a todo ser humano la adquisición de conocimientos para lograr alcanzar una vida plena mediante su desarrollo económico, social y cultural;

Que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la educación es “esencial e indispensable para el ejercicio de todos los otros derechos humanos y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todo ciudadano, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los niños, como también un acceso educativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria”;

Que, asimismo, la educación “(...) puede considerarse como un derecho clave, puesto que permite el completo ejercicio y disfrute de todos los demás derechos humanos. Todos los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos pueden disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima”;

Que, el derecho a la educación en el Perú tiene reconocimiento constitucional en el artículo 13, ubicado en el capítulo de los Derechos Sociales y Económicos, lo que no implica su desconocimiento como derecho fundamental, carácter que ha sido reconocido por la Ley N° 28044, Ley General de Educación (en adelante, Ley General de Educación) y por el Tribunal Constitucional, en tanto su fundamento principal es la dignidad de la persona humana;

Que, ahora bien, en cuanto a los servicios públicos, se les puede definir como aquellas actividades económicas de interés general dirigidas a satisfacer necesidades esenciales, que pueden ser brindadas tanto por el Estado — por ser el titular de estas—, como por privados; pero que, por su naturaleza, deben ser reguladas, aseguradas y controladas por el Estado;

Que, entre estas actividades se encuentra la educación, cuya prestación puede ser encargada a entidades privadas o entidades públicas, tal como lo señala el artículo 18 de la Constitución Política del Perú;

Que, a fin de ilustrar de mejor manera el concepto de educación como servicio público, podemos remitirnos, en primer lugar, al artículo 4 de la Ley General de Educación, que reconoce a la educación como un servicio público;

Que, en el mismo sentido se ha pronunciado en reiteradas oportunidades el Tribunal Constitucional, confirmando que “(...) la educación se configura también como un servicio público, en la medida que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución *per se* o por terceros bajo fiscalización estatal. Por ende, el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los servicios educativos, así como de aumentar progresivamente la cobertura y calidad de los mismos (...)”;

Que, por último, el artículo 3 de la Ley Universitaria declara la naturaleza de servicio público de la educación superior universitaria, y encomienda a las universidades su prestación, a través de la investigación, la docencia y el estudio;

Que, complementariamente, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, del 27 de agosto de 2020, se aprobó la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, que resalta que es función del Estado la



Resolución Rectoral N° 0154-2023-UNAP

consolidación de la prestación del servicio público educativo universitario, en la medida en que tiene la obligación de garantizar, entre otras cosas, que este se preste en la cantidad y con la calidad necesarias;

Que, la Ley General de Educación, reconoce que la educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo y se sustenta, entre otros, en el principio de calidad educativa, en virtud del cual se busca asegurar condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente;

Que, asimismo, señala que el sistema educativo peruano es integrador y flexible, en tanto abarca y articula todos sus elementos y permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. El propósito de la articulación del sistema educativo es posibilitar la integración, flexibilidad e interconexión para la organización de trayectorias distintas y diversas, según las necesidades y características de los estudiantes;

Que, siguiendo estos lineamientos normativos, la Ley de Educación contempla el funcionamiento de las instituciones e instancias de educación superior y su interrelación con la comunidad, poniendo especial énfasis en el aseguramiento de la calidad, acceso y articulación del sistema educativo, en beneficio de los estudiantes;

El principio del interés superior del estudiante:

Que, el inciso 5.14 del artículo 5 de la Ley Universitaria, reconoce como principio al interés superior del estudiante, el cual debe ser observado por toda la comunidad universitaria. Dicho principio tiene como consideración primordial atender el interés del estudiante en todas las medidas que se tomen, con el objetivo de garantizar el disfrute pleno y efectivo del derecho a la educación. Ahora bien, haciendo un símil con el principio del interés superior del niño, el principio del interés superior del estudiante se debe entender desde sus tres (3) dimensiones: como un derecho sustantivo, como un principio interpretativo y como una regla de procedimiento.

- a) **Como un derecho sustantivo.**- El derecho que los estudiantes tienen a que sus intereses sean tomados como una consideración primaria cuando se están evaluando intereses diferentes a fin de llegar a una decisión sobre el tema en cuestión.
- b) **Como un principio jurídico interpretativo fundamental.**- Si una disposición legal está abierta a más de una interpretación, debe elegirse la interpretación que brinde mejor protección a los intereses del estudiante.
- c) **Como una norma de procedimiento.**- La toma de decisiones dentro de un proceso o procedimiento debe incluir una evaluación del posible impacto (positivo o negativo) de la decisión sobre el estudiante. La justificación de una decisión debe evidenciar que el interés del estudiante ha sido explícitamente tomado en cuenta.

Sobre la aplicación del artículo 102 de la Ley Universitaria:

Que, el artículo 102 de la Ley Universitaria establece la matrícula condicionada por rendimiento académico, señalando lo siguiente:

Artículo 102. Matrícula condicionada por rendimiento académico

La desaprobación de una misma materia por tres veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la universidad. Al término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez procede su retiro definitivo.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no impide que el Estatuto de la universidad contemple la separación automática y definitiva por la desaprobación de una materia por tercera vez.
(Subrayado agregado).

Que, por tanto, en virtud del citado artículo, las universidades están facultadas para ejecutar la separación temporal de los alumnos en caso hayan reprobado tres (3) veces la misma materia; sin perjuicio de adoptar la separación automática y definitiva ante dicha situación, siempre que ello haya sido contemplado en su Estatuto.



Resolución Rectoral N° 0154-2023-UNAP

Que, respecto al término “materia”, se verifica que la Ley Universitaria no define este concepto, no obstante, podemos entenderlo como aquella unidad de enseñanza-aprendizaje en la que se ofrece un conjunto de conocimientos teóricos y/o prácticos, mediante metodologías, apoyos didácticos y procedimientos de evaluación específicos, que, a la vez, forman una carrera o un plan de estudios, y que se dictan en los centros educativos;

Que, en esa línea, debe tenerse en cuenta que lo dispuesto en el artículo 102 de la citada Ley está orientado a determinar un marco de referencia para las universidades, en términos de los niveles mínimos de exigencia académica que permitan que los estudiantes reciban una formación sólida e integral para insertarse al mundo laboral de modo eficiente y productivo;

Que, considerando lo antes dicho las universidades, como parte de su autonomía normativa, ante la desaprobación de una misma materia tres veces, podrán plantear, en su estatuto o normativa interna, alternativamente, a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 102 de la Ley Universitaria, la separación automática y definitiva del estudiante universitario, conforme al texto del segundo párrafo de dicho artículo;

Que, a contrario, el hecho que las universidades puedan establecer en su regulación interna, otros supuestos, por ejemplo, la desaprobación de una misma materia por menos de tres veces, distintos a los señalados en el primer párrafo del artículo 102 de la Ley Universitaria, implicaría atentar contra el principio de interés superior del estudiante que rige a las universidades;

Que, sin embargo, el nivel de exigencia académico es determinado, principalmente, por la institución educativa, que es responsable de establecer el rigor que habrá en sus actividades educativas y su sistema de evaluación, y con ello, el impacto de esta condición en el aprendizaje y en el éxito estudiantil;

Que, lo dispuesto en los párrafos precedentes, guardan intrínseca relación con los deberes que debe tener todo estudiante conforme lo establece el artículo 99 de la Ley Universitaria, siendo estos deberes, los siguientes:

Artículo 99. Deberes de los estudiantes

Son deberes de los estudiantes:

(...)

99.2. *Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan.*

99.3 *Cumplir con esta Ley y con las normas internas de la universidad.*

(...)

99.9 *Los demás que disponga el Estatuto de cada universidad.*

Que, en ese entendido, los estudiantes tienen la obligación de aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan o en los que se hayan matriculado;

Que, además de ello y atendiendo a lo establecido en el artículo 102 de la Ley Universitaria, las universidades, a través de su normativa interna, deberán desarrollar disposiciones acordes a lo señalado por la referida Ley; siendo los actos contrarios a dicho ordenamiento susceptibles de sanción;

Que, por ende, se corrobora que la matrícula condicionada, proviene de la Ley Universitaria, constituyéndose en una infracción para la universidad, el no velar por el cumplimiento de dicha obligación. Asimismo, es pertinente precisar que el citado artículo no establece excepción alguna respecto a su aplicación;

Que, en ese contexto, la SUNEDU se encuentra en la potestad de llevar a cabo acciones de supervisión, a través del órgano de línea de la Dirección de Supervisión, las mismas que garantizan el cumplimiento de lo establecido en la Ley Universitaria y en la normativa vinculada sobre la materia;

Que, así, en el acápite 3.66 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU, se ha estipulado como una infracción leve el “permitir la matrícula de estudiantes que presentan deficiencias en el rendimiento académico, en contra de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Universitaria”;



Resolución Rectoral N° 0154-2023-UNAP

Que, al respecto, la SUNEDU concluye lo siguiente:

Las universidades, en el marco de su autonomía normativa, pueden regular en su estatuto o normativa interna, la separación temporal, automática o definitiva de un estudiante universitario ante la desaprobación de una misma materia por tercera o cuarta vez, esta debe desarrollarse en el marco de lo que se establece en el artículo 102 de la Ley Universitaria; siendo su no aplicación, materia susceptible de sanción.

El artículo 102 de la Ley Universitaria está orientado a determinar un marco de referencia para las universidades, en términos de los niveles mínimos de exigencia académica que permitan que los estudiantes reciban una formación sólida e integral para insertarse al mundo laboral de modo eficiente y productivo. Sin embargo, el nivel de exigencia académico es determinado, principalmente, por la institución educativa, que es responsable de establecer el rigor que habrá en sus actividades educativas y su sistema de evaluación, y con ello, el impacto de esta condición en el aprendizaje y en el éxito estudiantil.

El estudiante conforme lo dispone el artículo 99 de la Ley Universitaria, tiene la obligación de aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursa, así como cumplir con las disposiciones contenidas en la citada Ley y en las normas internas de la universidad.

Sobre las sanciones académicas:

Que, mediante Resolución del Consejo Universitario N° 010-2015-CU-UNAP se aprobó el Reglamento Académico de Pregrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (RAPUNAP), ello en virtud de la autonomía normativa y académica reconocida a la UNAP;

Que, el inciso c) del artículo 22 del RAPUNAP, preceptúa que la separación temporal hasta dos semestres es una sanción académica;

Que, el capítulo XXVI del RAPUNAP regula las sanciones académicas. El artículo 148 del RAPUNAP fija que la sanción académica se ejecutará tomando en cuenta solo el PPS menor de once;

Que, en virtud del artículo 151 del RAPUNAP, las Facultades son responsables de hacer cumplir el régimen de sanción. Las sanciones son:

- Amonestación escrita, cuando el estudiante no alcance en el semestre académico un PPS igual a once (11).
- Suspensión semestral, cuando en dos semestres consecutivos o tres no consecutivos, contando el que dio origen a la "amonestación", el estudiante no alcance un PPS igual a once (11), en este caso el estudiante no podrá matricularse en el semestre siguiente.
- Retiro definitivo, cuando al reingresar a su Facultad cumplida la suspensión, el estudiante no logre aprobar su PPS en cualquiera de los dos semestres siguientes. Del mismo modo ocurrirá si desapruueba por cuarta vez una misma materia o asignatura (art. 102 de la Ley N° 30220).

Que, por último, el artículo 152 del RAPUNAP dispone que *"La UNAP, con resolución rectoral, cancelará la condición de estudiante de aquel que sea retirado definitivamente por bajo rendimiento académico o se exceda en los límites de las licencias indicadas en el artículo 40° del presente reglamento"*;

Que, por otro lado, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 102 de la Ley Universitaria, se aprobó el Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (REPUNAP), mediante Resolución del Consejo Universitario N° 125-2022-CU-UNAP del 19 de octubre del 2022;

Que, el capítulo 24 del REPUNAP regula el retiro definitivo de la UNAP, de acuerdo al artículo 116 el retiro definitivo es la pérdida de la condición de estudiante debido a bajo rendimiento académico;



Resolución Rectoral N° 0154-2023-UNAP

Que, según el artículo 117 del REPUNAP, el retiro definitivo se aplica a los estudiantes de la UNAP en los siguientes casos:

- Por bajo rendimiento académico, luego de reingresar después de haber cumplido la sanción de suspensión establecida en el artículo 229 del presente REPUNAP y no logra obtener PPS aprobatorio en el semestre siguiente.
- Si desaprueba por cuarta vez un mismo curso (Artículo 102 de la Ley N° 30220 concordante con el Artículo 229 inciso c) del presente REPUNAP).
- Por abandono de estudios durante dos (2) semestres académicos consecutivos, sin haber solicitado reserva de matrícula.
- Por exceder los límites de la reserva de matrícula indicada en el artículo 42 del presente REPUNAP.

Que, dicho esto, es menester precisar que, en virtud del artículo 2 inciso 24. d), el artículo 103 y 109 de la Constitución Política del Perú; el artículo III del Título Preliminar del Código Civil; y el inciso 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde aplicar en el caso en concreto el RAPUNAP, debido a que la administrada tiene la calidad de estudiante desde el semestre académico 2015-1 hasta el semestre académico 2021-2; es decir, los hechos y los efectos se produjeron en vigencia del RAPUNAP, y no durante la vigencia del REPUNAP, este último publicado el 19 de octubre del 2022;

Que, ahora bien, de la revisión del documento presentado por la administrada "SEMESTRES ESTUDIADOS Y PROMEDIOS PONDERADOS SEMESTRALES", en virtud del principio de presunción de veracidad, se considerará cierto lo contenido, se tiene lo siguiente:

Semestres estudiados	PPS
2017-1	10.682
2018-1	9.722
2019-2	10.5
2020-2	11.389
2021-1	12.727
2021-2	12.071
2022-1	10.428

Que, de dicho cuadro, se concluye que la administrada desaprobó en cuatro semestres no consecutivos. No obstante, la administrada desaprobó en el semestre académico 2022-1 con PPS de 10.428, después de haber transcurrido más de dos semestres académicos (2020-2, 2021-1, 2021-2, 2022-1); es decir, recién al cuarto semestre académico de haber desaprobado su PPS del semestre académico 2019-2 volvió a desaprobado; por lo que, no se configura la causal de retiro definitivo establecido en el inciso c) del artículo 151 del RAPUNAP, al no haber desaprobado nuevamente su PPS dentro de los dos semestres siguientes al semestre académico 2019-2;

Que, por lo expuesto, no corresponde imponer o aplicar el retiro definitivo de la universidad a la administrada por no haber incurrido en la causal c) del artículo 151 del RAPUNAP de la UNAP;

Que, en consecuencia, corresponde estimar el pedido planteado por la señorita Rocío del Pilar Vargas Zagaceta, en su escrito S/N del 11 de enero de 2023;

Estando al **Informe N° 090-2023-OAJ-UNAP**, de fecha 17 de febrero de 2023, emitido por el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNAP, y;

Que, en uso de las atribuciones que confieren la Ley N° 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria N° 003-2021-AU-UNAP y su modificatoria aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria N° 004-2021-AU-UNAP;



UNAP

RECTORADO

Resolución Rectoral N° 0154-2023-UNAP

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar fundado la solicitud interpuesta por doña **Rocío del Pilar Vargas Zagaceta**, con Código Universitario N° 2151919, Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, en la Escuela Profesional de Idiomas Extranjeros, en la especialidad de Inglés – Alemán de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), en mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la **Secretaría General de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)**, remitir en copias fedateadas del **Informe N° 090-2023-OAJ-UNAP**, de fecha 17 de febrero de 2023, emitido por el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNAP y el presente acto resolutivo a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) de la UNAP, a fin de que proceda con el trámite respectivo que permita la matrícula de la estudiante **Rocío del Pilar Vargas Zagaceta**, en el siguiente semestre académico.

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el presente acto resolutivo a doña **Rocío del Pilar Vargas Zagaceta**, conforme a Ley.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Rodil Tello Espinoza
RECTOR



Kadhir Benzaquen Tuesta
SECRETARIO GENERAL

Dist.: R,VRAC,VRINV,FCEH,DGA,DRAA,OPP,OAJ,Leg.(1),Int.(1),SG,Archivo(2)
fahn